

Entrada en vigor de la LOPD. Alcance de la Disposición Adicional Primera

Se ha planteado en diversas ocasiones el alcance que debe otorgarse al contenido del párrafo primero de la Disposición Adicional Primera de la LOPD, según la cual “los ficheros y tratamientos automatizados, inscritos o no en el Registro General de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley Orgánica dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor. En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos y las Administraciones Públicas, responsables de ficheros de titularidad pública, deberán aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la existente”.

El análisis de esta cuestión planteada exigirá tomar en consideración el espíritu, los antecedentes normativos de la Ley Orgánica 15/1999 y su propio contenido literal, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 3.1 del Código Civil.

Pues bien, planteada así la cuestión, se considera que la aprobación de la Ley Orgánica 15/1999 no supone una demora en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los responsables de los ficheros. Ello se fundamenta en que el “período transitorio” previsto en la LOPD sólo se refiere a las obligaciones puramente formales impuestas a los responsables de los ficheros, pero nunca al cumplimiento de los deberes que les vienen impuestos por la Ley. A esta conclusión coadyuvan los siguientes motivos

PRIMERO.- El sentido literal de la norma, que prevé la “adecuación” y no el “sometimiento” al régimen previsto en la Ley, que será aplicable desde el mismo día de su entrada en vigor, conforme a lo establecido en Disposición Final Tercera.

SEGUNDO.- En este mismo sentido, la disposición se complementa con la concreción de los deberes formales (de inscripción en el Registro General de Protección de Datos) que habrán de cumplimentarse en el período transitorio de tres años, aplicable tanto a los ficheros anteriormente inscritos como a aquéllos que deberán inscribirse “ex novo” como consecuencia del régimen previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica.

TERCERO.- El antecedente de lo establecido en la disposición analizada se encuentra en la previsión contenida en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de tratamiento automatizado de datos de carácter personal (LORTAD), que establecía el plazo de cumplimiento del deber formal de inscripción o, tratándose de ficheros de titularidad pública, de adopción de la correspondiente disposición de carácter general, por

lo que el contenido de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999 habrá de ser concebido con una finalidad similar.

CUARTO.- La adopción de un criterio interpretativo distinto supondría una inaplicación práctica de lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 15/1999, según la cual “la presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes, contado desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

En efecto, si el plazo en que los ficheros debieran someterse al régimen previsto en la Ley Orgánica fuera de tres años, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica supone una derogación expresa del régimen establecido en la LORTAD, sólo admitiría dos posibles interpretaciones: entender que la nueva Ley no entrará en vigor hasta transcurridos tres años desde el mes al que se refiere la Disposición Final Tercera, rigiendo entre tanto la LORTAD; o considerar que durante ese “período transitorio” no existiría norma alguna vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

La segunda de las interpretaciones resulta, lógicamente inaceptable, por lo que sólo sería posible la primera, esto es, la subsistencia de la LORTAD durante el período de tres años (hasta el día 14 de enero de 2003).

Pues bien, esta última tesis tampoco resultaría aceptable si se tiene en cuenta, tal y como indica la exposición de motivos del Proyecto de Ley remitido originariamente a las Cortes, que la reforma trae su causa de la necesidad de adaptar las disposiciones de la LORTAD al régimen establecido en la Directiva 95/46/CE. La citada Directiva establece taxativamente en su artículo 32.1, párrafo primero, que “los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar al final de un período de tres años a partir de su adopción”, plazo que quedó cumplido el día 24 de octubre de 1998.

En consecuencia, no puede considerarse que dentro de la finalidad perseguida por la reforma se pretenda dilatar el plazo de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la Directiva, que debían haber sido transpuestas al derecho interno más de un año antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica.

QUINTO.- Además la interpretación indicada resulta ser la única coherente con la propia lógica y sistemática de la Ley Orgánica 15/1999, ya que otra interpretación supondría la inaplicación de los principios que en la Ley se contienen durante el período de tres años.

A nuestro juicio, esta interpretación carecería de sentido, debiendo prevalecer la norma que supone una mayor protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, tal y como consagra

reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que supone la aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Primera, exclusivamente, a los aspectos formales de “adecuación” de los ficheros a la Ley Orgánica 15/1999.

En consecuencia, se indicó que el periodo de adecuación de tres años contemplado en la Disposición Adicional a la que se viene haciendo referencia se refiere exclusivamente, en cuanto a los ficheros que ya se encontraban sometidos al ámbito de aplicación de la LORTAD a los deberes meramente formales, no incidiendo en la regulación sustantiva de la protección de datos. Este criterio fue posteriormente ratificado por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado en su Dictamen de fecha 8 de agosto de 2000.